

Ciudad de México a 28 de febrero de 2025  
CEAVICDMX/146/2025

**LIC. EDGAR ALEJANDRO GÓMEZ JAIMES**  
**COORDINADOR DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS**  
**PRESENTE.**

En los autos del **JUICIO DE AMPARO 1830/2023**, promovido por **LAURA SERAPIO RAMÍREZ**, ante el juzgado **TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO** y en atención al **OFICIO: 6249/2025** signado por la **SECRETARÍA DEL JUZGADO**, recibido el 27 de febrero del presente año, se dictó un acuerdo, lo que hago de su conocimiento.

Sin otro particular, le agradezco las atenciones que preste a la misma.

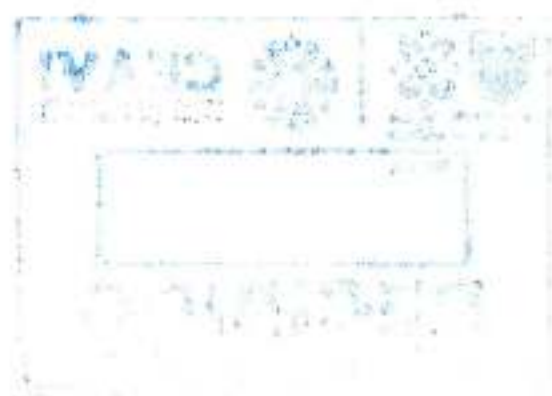


**Lic. Ernesto Alvarado Ruiz**  
**Comisionado Ejecutivo de Atención a**  
**Víctimas de la Ciudad de México**

Elaboró: RRE

Revisó: CVFC

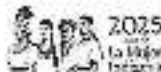






PODERADO CAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO  
DE DISTRITO EN  
MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN  
LA CIUDAD DE  
MÉXICO.



VIGE

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"

## JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

6246/2025 SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

6246/2025 JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

6247/2025 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO (REF. R.A. 259/2024)

6249/2025 DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD T-III "PALMATITLA"

CUMPLIMIENTO

6249/2025 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO

J.A. 1830/2023

6250/2025 HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)



EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL RELATIVO AL JUICIO DE  
AMPARO 1830/2023, PROMOVIDO POR D.L. C. S., SE DICTÓ EL SIGUIENTE  
ACUERDO:

Ciudad de México, veinte de febrero de dos mil veinticinco.

### TESTIMONIO RECURSO DE REVISIÓN

Se agrega a los autos el oficio signado por el personal adscrito al Tercer Tribunal  
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que envía:

Testimonio de la resolución correspondiente la sesión ordinaria celebrada por  
videoconferencia el día treinta de enero del año en curso emitida en el amparo en revisión  
R.A. 259/2024 de su índice.

En dicha resolución, el Tribunal Revisor por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. En materia de la revisión se **REVOCA** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a la parte quejosa LAURA  
SERAFIO RAMÍREZ, en representación de su hijo menor de edad de identidad  
reservada con siglas iniciales D.L.C.S., respecto de los actos y autoridades precisados  
en la exposición de esta sentencia por los motivos, fundamentos y para los efectos allí  
precisados.

Notifíquese."

Lo anterior comuníquese a las partes para su conocimiento y efectos legales  
consecuentes; se ordena sacar el recibo de estilo respectivo a la superioridad; y, háganse  
las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

### EFFECTOS DEL AMPARO

Como señalar que el Tribunal de Alzada revoca la sentencia recurrida en los siguientes  
términos:

"Ante lo fundado de los conceptos de violación, así como el reconocimiento por parte  
de este tribunal colegiado como víctima de violación de derechos humanos de la menor  
quejosa, procede otorgar el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la  
autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo indirecto Director del Hospital  
General de Ticomán, así como a las autoridades vinculadas, a saber el Director del Centro  
de Salud T-III "Palmatitla" y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de  
México, realicen lo siguiente:

a) Se otorgue la calidad de víctima a la quejosa y los derechos que el mismo marco  
establezca;



b) Realicen de forma coordinada las acciones necesarias que permitan subsanar el procedimiento establecido en los artículos 58, 57, 58 y 61 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México en relación con los artículos 23 a 56 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, entre estas, la aportación de los elementos indispensables y eficaces para concretizar las medidas de reparación integral del daño ocasionado con la violación.

c) Se concedan las medidas de reparación integral del daño, a saber aunque no de manera limitativa, las medidas de rehabilitación, compensación, entre ellas, el reembolso de erogaciones médicas u otras, que tuvieran que hacerse por la omisión de brindar atención médica en su debido momento; así como aquellas medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y, en su caso, de no repetición.

d) Se registre a la quejosa (víctima) en el Registro Nacional y Estatal de Víctimas, y las consecuencias directas de los, previstas en el marco aplicable.

En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para los efectos antes precisados.\*

#### REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO

En consecuencia, con fundamento en el artículo 182 de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Director del Hospital General de Ticomán, así como a las autoridades vinculadas Director del Centro de Salud T-III "Palmarillo" y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS contados a partir de la notificación del presente provido, en el ámbito de sus competencias den cumplimiento al fallo protector.

En el entendido que deberán remitir copia certificada de los documentos con los que acrediten el avance en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo o el otorgamiento a la misma, pues de lo contrario se les tendrá como evasivos para acatar lo requerido y se les hará efectivo el apercibimiento correspondiente.

Resulta aplicable la jurisprudencia P.J. 68/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro doce, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página once, de texto siguiente:

"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos legales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que manifieste en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos trascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, se



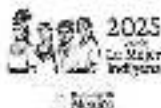


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO  
DE DISTRITO EN  
MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN  
LA CIUDAD DE  
MÉXICO.

CUMPLIMIENTO

J.A. 1830/2623



"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"

pretexto de generar una condición de determinación de los demás impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nuevo cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o el envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o amaza de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de ejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso."

#### REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO

Asimismo, de conformidad con los artículos 182, tercer párrafo y 194 de la legislación de la materia, se REQUIERE a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que en el carácter de superiores jerárquicos, que tienen la atribución para ser cumplimentados, dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de la notificación del presente proveído, acrediten haber conminado a sus subordinadas respectivamente a que cumplan la ejecutoria de amparo que nos ocupa.

Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas como superiores jerárquicos, que deben hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular o imponer para conseguirlo, haciéndolo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, ya que de no proceder así, incurrirá en responsabilidad en los mismos términos que la autoridad requerida.

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J.64/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente:

"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución de fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, la cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notoria perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordene la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 258 y 268 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio auto, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar



que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrió en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y establecer un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inajecución de sentencia; se revisará el trámite de Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y no obstante existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.<sup>8</sup>

#### APERCIBIMIENTO

Se les apercibe que de no acatar lo ordenado en los párrafos que anteceden sin causa justificada, se les impondrá MULTA DE CIENTO VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, de conformidad con lo ordenado en los artículos 238, primer párrafo, y 256, en relación con el 192, todos de la Ley de Amparo.

Es aplicable la jurisprudencia P/J/59/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 5, cuyo rubro y contenido siguiente:

**"CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).** Conforme a lo dispuesto en el estado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conducirá de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan;





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO TERCERO  
DE DISTRITO EN  
MATERIA  
ADMINISTRATIVA EN  
LA CIUDAD DE  
MÉXICO.

CUMPLIMIENTO

J.A. 1839/2023



FORMA 3.0

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"

Incluso, los apendices respectivos deberán tomar en cuenta esos particularizados. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual le falta la emisión de alguno de ellos implica la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad o autoridades, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejercen poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular el cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo."

Notifíquese.

Así lo proveyó y firmó electrónicamente Ysela Elizabeth Medina Alcántara, Jueza de Centro Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de María Isabel Morales Romero, Secretaria que autoriza y da fe. Day fe.

LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES  
CONDUCTENTES.

CIUDAD DE MÉXICO, VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO,

MARÍA ISABEL MORALES ROMERO

SECRETARIO (A) DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO  
EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO,









AMPARO EN REVISIÓN  
R.A. 229/2024

PARTES QUEJOSA Y RECURRENTE  
LAURA SERAPIO RAMÍREZ EN  
REPRESENTACIÓN DE SU HIJA MENOR  
DE EDAD DE INICIALES D.L.C.S.

MAGISTRADA PONENTE:  
DALLA USHER JUÁREZ

SECRETARÍA:  
MIRIAM PÉREZ RAMOS

Ciudad de México. Sentencia del Tercer Tribunal  
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,  
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por  
videoconferencia el día veintitres de enero de dos mil  
veinticuatro.

A.F. y O.S. para recibir los autos de todo R.A.  
229/2024 formada con motivo del recurso de revisión  
interpuesto por LAURA SERAPIO RAMÍREZ en  
representación de su hija menor de edad de iniciales  
D.L.C.S. contra la sentencia dictada en la audiencia  
constitucional celebrada el ocho de marzo de dos mil  
veinticuatro, por la Junta Tercera de Distrito en  
Materia Administrativa en la Ciudad de México en el  
juicio de amparo indirecto número 1831/2023; y,

#### RESULTANDO

Validez al escrito protocolario.  
[...]

En la demanda de amparo indirecto y escrito  
protocolario, la parte quejosa señaló como preceptos  
violados en su petitorio los artículos 1, 4, 50 y 52 de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
habrá los antecedentes del auto a fin de valor los  
preceptos de violación que están pendientes.

SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer  
de la demanda de amparo indirecto a la Junta Tercera  
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de  
México la que, mediante providencia de dieciséis de  
noviembre de dos mil veinticuatro, radcó el asunto bajo  
el número J.A.I. 1831/2023, previo a lo cual quince  
para el efecto de que el presidente la autoridad que  
colaboró como representante y la asistiera en la comparecencia  
de los ciudadanos del auto recurrente, con el  
aprobatorio que de no desahogar en tiempo se  
lindó por no comparecer.

TERCERO. Mediante providencia de veintinueve de  
noviembre de dos mil veinticuatro, la Junta de distrito  
uno por desahogo el comparecencia antes citado y  
admitió a trámite la demanda, dio la intervención que le  
corresponde a Fiscal Ejecutivo Tercero asistido y refirió  
hechos y ahora para la celebración de la audiencia  
constitucional.

OFICIO 6-247  
J.A. 1830/2023

AMPARO EN REVISIÓN  
R.A. 229/2024

PRIMERO. Por escrito presentado al dieciséis de  
noviembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de  
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en  
Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura  
Serapio Ramírez en representación de su hija menor  
de edad de identidad reservada con la sigla D.L.C.S.  
acudió al amparo y protección de la Justicia Federal  
contra la acción de las autoridades respectivas  
siguientes:

#### Autoridades respectivas

Hospital General de México dependiente de la  
Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

#### Actos respectivos

Tratamiento médico quirúrgico, diagnóstico de  
violencia obstétrica, en febrero de los meses de la  
quinta de revisión.

Discriminación, violencia obstétrica y malos tratos  
durante y después de la atención médica durante la  
atención médica de la segunda obstétrica celebrada  
en el Hospital General de México.

Intervención de la Comisión General de  
Colaboración para la Atención de Emergencias  
Quirúrgicas.

Intervención de los números 2.52, 5.1.4, 5.1.7,  
5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.2.1.1A, 5.2.1.2, 5.2.1.12 de  
la Norma Oficial Mexicana NOM-007-S2/2015  
para la atención de la mujer durante el embarazo,  
parto y puerperio, y de la primera recepción de la

AMPARO EN REVISIÓN  
R.A. 229/2024

CUARTO. Seguir el procedimiento, al ocho de  
marzo de dos mil veinticuatro, la Junta de distrito  
celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia,  
bajo el punto nominal siguiente:

QUINTO. Se sobrevino en el juicio de amparo a que  
está sometido en mérito.

QUINTO. Informó con la anterior resolución, a  
través del escrito de agravios presentado al uno de abril  
de dos mil veinticuatro, en el Portal de Servicios en  
Línea del Poder Judicial de la Federación, la parte  
quejosa interpuso recurso de revisión.

SEXTO. Por razón de turno correspondió conocer a  
este Tercer Tribunal Colegiado en Materia  
Administrativa del Primer Circuito, mediante auto de  
presidencia de diecinueve de junio de dos mil  
veinticuatro, admitió a trámite el recurso de revisión, lo  
registró con el número de expediente R.A. 229/2024 y  
ordenó notificar al Fiscal Ejecutivo Tercero adscrito.

SEPTIMO. En agosto de quince de julio de dos  
mil veinticuatro, se ordenó llamar a este auto a la  
Magistrada Alma Dally Aguilar Chávez Nava, para  
formular el proyecto de resolución respectivo en términos  
del artículo 82 de la Ley de Amparo.



DÉCIMO. A Quarta do provido da Presidência do  
dois de diligências de dois mil e quinhentos, em sua pri-  
meira página, al requerimento a que se refere e se ordena  
desenvolver entre a Polícia de la Regerencia Civil.  
Quarta Junta para la Reorganización del ejército

10



Cabe recordar, por su contenido, la toda unidad del registro digital 222621, sustentada por: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, folio 145 de volumen 145-192, primera parte, página 145 de la Segunda Época del Semanario Judicial de la Federación, de fecha VEINTIDOS, LEONARDO PARA LA PROSECUCION DEL RECURSO DE AMPARO.

2

## CONSIDERANDO

**PRIMERO.** La Tercera Tribunal Colegiada en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso a), 54 de la Ley de Amparo y 33 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como del Acuerdo 10743 del Pleno del

142

Por tanto, el Rincón para la Imposición del Seguro de Rescote, pasando del trazo de mano al dos de abis, tónica de dos mil veinticuatro. Se descomponen las octavas respecto, los allos cubiertos, resguardados, ducados, varillas, ventrillo, volcancuara, ventrillo, ventrillo, ventrillo, ventrillo y trazo de mano.

8



todos ellos de la misma anualidad, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Circular 72024 de oficio de febrero de dos mil veinticuatro, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Enfin, como el recurso de revisión fue interpuesto el uno de abril de dos mil veinticuatro, a favor del Portal de Justicia en Línea del Poder Judicial de la Federación, es oportuna.

CUARTO. No se transcribirá la sentencia recurrida ni los agravios formulados en su contra, por no ser un requisito que exige el artículo 74 de la Ley de Amparo.

Sierra de Arceón y la anterior la jurisprudencia número 26/2015, con registro digital 164618 separada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el sitio XXXI mayo de dos mil diez, página 210 del Semanario Judicial de la Federación y al Gaceta, bajo el rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.

QUINTO. Las consideraciones en que se fundó la sentencia recurrida, en la que se revoca del proceso



seguir, y no la persona recién nacida y el violador al secreto obstétrico.

Lo anterior, al pretender desconocer de autoridades que puede o no ejercer la autoridad responsable en función de los fundamentos jurídicos que prevén su existencia legal, que en realidad están considerándose como conceptos de violación contenidos o impugnados los hechos o circunstancias con que cuenta la autoridad al expedir o emitir determinaciones antes y en relación con argumentos médicos valor por el gobierno o fin de establecer la inviolabilidad de los datos.

CONSIDERANDO TERCERO de la presente recurrente. Todo por cuanto el acto reclamado otorgado a la autoridad responsable, ya que así se advierte de los considerandos emitidos en cumplimiento a la autorización otorgada en dicho escrito.

CONSIDERANDO CUARTO de la presente recurrente. La jurisprudencia antes, de oficio, la actualización de la causa de la procedencia prevista en la fracción XXXI del artículo 81 de la Ley de Amparo respecto de la emisión o negativa de atención médica; lo anterior, de virtud de que, aun cuando sustenta el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal o material alguno en la esfera de la quejosa, por haber dejado de

recurso o interés sustancial, son los que anegunda se simulan.

CONSIDERANDO SEGUNDO de la presente recurrente. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, creché los actos reclamados, considerándose:

De la Dirección del Hospital General de Tlaximán, dependiente del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado Servicio de Salud Pública de la Ciudad de México.

La emisión o negativa de atención médica, constitutivo de violencia obstétrica.

Señaló que no podría considerarse actos reclamados los contenidos en: a) Determinación, violencia institucional y falta de salud, instrumentar y deprimen médicos durante la atención médica de la urgencia obstétrica derivada de un parto prematuro; b) Incumplimiento del Convenio General de Cooperación para la Atención de Emergencias Obstétricas; c) Incumplimiento de los numerales 5.2.2, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.11, 5.1.18, 5.1.14, 5.2.1.14.5, 5.2.1.3, 5.2.1.12 de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2015, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y

edad al objeto o materia que motivó la promoción del juicio de amparo.

Así también, tanto las consideraciones del juicio de amparo.

Por lo que, determino que aun cuando sustenta el acto reclamado considerando en la emisión o negativa de atención médica, constitutivo de violencia obstétrica, lo cierto es que la materia de la que se trata la parte quejosa había dejado de existir.

Que, en la especie, no podría considerarse los datos de un eventual fallo positivo, en razón de que, con motivo de la atención médica recibida en la clínica particular donde se recibió una nación manual endocutánea y la colocación o dispositivo de planificación familiar, la madre del niño había dejado de existir para ser encontrada siendo atendido en una clínica privada.

Refirió que, atendiendo a las circunstancias del caso, de las cuales se desprenden los argumentos formulados a la quejosa con la finalidad de que asistiera al Hospital General de Tlaximán a recibir la atención médica solicitada sin que se haya atendido, así como la manifestación de la promotoria en el sentido de que no poseen más la atención médica, porque ya había sido





derivadas de la actividad privada, no resultaría éticamente aceptable la creación de un sistema, en el cual lo que no sucede más la situación jurídica depende del nivel de materialidad, es decir, al haber recibido la atención médica requerida, se disuere por terminados los derechos de sus venidas o negativa, esto es, desaparecería la situación jurídica de asistencia de la protección del Estado en el derecho fundamental de salud.

(En consecuencia, ordenó el juicio de amparo en favor del artículo 51, fracción XXI, en relación con el RS "Artículo 51, sentido de la Ley de Amparo".

SIXTO. La parte que nos iba a valer en las de  
aquellas las retiramos rápidamente:

2. PRIMER ASPECTO. Que la resolución impugnada parte de una inadecuada fijación de los datos relacionados, haciendo caso omiso de los argumentos vertidos en la demanda.

Puede que fue momento que se señaló que el único lado negativo fue la presión o negativa de unidades médicas constituida de unidades móviles, que los pacientes son requeridos condesa en el hospital que se cubren primero en cuanto al manejo la medicina de los otros departamentos.



• **SEGUNDO AGRAVIO.** Dada la inejecución interpretada no sólo las causas de subdesarrollo del campesinado de género y de confianza a las instituciones de la Sistema Corte no Justicia de la Nación.

Indicio que la Primera Sección de Sala IV de la Corte de Justicia de la Nación resolvió que las pruebas de incoherencia, específicamente la del acuerdo de alquilar o por haber dejado de cobrar el objeto a cambio del que se reclamó, no podían ser suficientes de por sí para inferir que el caso debía ser unido al anterior para incoherencia por violaciones de derechos humanos correlativas por las similitudes en los hechos reconocidos con el anterior, para así promoverse que la realidad de derechos fuera más accesible a la justicia.

A demonstrare una tendenza di violenza e di criminalità contro la mucca, il mondo dovrà analizzare anche una prospettiva da gáwen para permitir que a qualificação dos atos e as respectivas reações se justifiquem.

• **PERCER AGRADO.** Que la resolución impugnada se someta al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 7 (libertad) de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación racial.

La mujer no quiere que sus niños se tornen en víctimas por la guerra, no son como ellos: una ragazza en la escuela materna, sino que son, en el futuro, seres a plasmarse de caracoles humanos.

Dejó en estado de completa insensibilidad a los cuerpos de rescatar los hechos que constituyen graves crímenes humanos y degradantes, nuevos de hecho constituido de discriminación, violencia institucional, violencia obstétrica e incumplimiento de los comités jurados que aseguran el respeto la salud y la vida de la mujer.

Siendo así, una cosa es que la violencia responsable debiera tener atención médica y otra muy distinta es que el personal de salud psiquiátrico administrara o brindara a una paciente en su control de una asignada específica. Que incluso, el personal médico pudo haber pasado la atención física y mental después de violencia intimidatoria, discriminación y malos tratos inherentes y negados tales. Sin embargo, debido a lo poco ocurrido entre situaciones, siendo todas ellas roles reconocidos inherentemente relacionados pero independientes, por lo que al hecho de que la víctima recibiera atención médica privada, no implica que a dicho médico se le otorgó el rol de violencia que para el personal médico no era tal.



**SEPTIMO**, altro bene, se provate a sostituirlo con la vostra attività quotidiana per la casa.

Fue el cumpleaños de la esposa cuando me enteré que el día de quince en mayo de dos mil diecinueve el rodador al servicio en el hotel RA 1501916 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desahucio:

72. La ricerca ha prodotto anche dati che, in particolare, si riferiscono al fatto che il 60 per cento dei rispondenti ritiene che il paese si stia muovendo nella giusta direzione e che il 50 per cento sia d'accordo con la politica economica del governo. Inoltre, il 60 per cento ritiene che il paese stia migliorando e che il 50 per cento sia d'accordo con la politica economica del governo. Inoltre, il 60 per cento ritiene che il paese stia migliorando e che il 50 per cento sia d'accordo con la politica economica del governo.

En fin de parafraseo, respecto al uso de otros recursos visuales en el caso de "representación simbólica" en la Gráfica 209, el artículo 21 de la Ley de Acceso, por considerar que este recurso puede representarse que la obra es concebida de forma tal que se puede acceder, en virtud de que el objeto o la imagen de dicho objeto, se vea.

El Fito Alvaro Díaz sostiene que los niveles de la producción del conglomerado Andino y al mismo tiempo el nivel de los recursos del Estado, favoreciendo al sector privado de este conglomerado, son los factores de desarrollo del sistema por donde se pasa.

El Dr. Edgar López, médico de cabecera de la familia, informó que el joven consultaba desde el momento al almorzar por problemas de apetito y pérdida de interés por actividades que disfrutaba, como el fútbol y el video. En la consulta anterior, el diagnóstico era de depresión leve y se le indicó un tratamiento con medicamentos para mejorar el estado de ánimo y se le recomendó un seguimiento cercano.

[illegible][illegible][illegible]

Ello implica evaluación de servicios de atención médica para reducir las consecuencias de los actos de violencia y proporcionar apoyo psicológico en el caso de un suceso, algo que recae dentro del deber de los proveedores de la atención, responsable y conlleva un trabajo adicional no remunerado a la hora, muy por encima de las actividades de fondo.

31. En sus visitas, los MV selecciona y selecciona  
personas para ser sus aliados locales.



maior, mais desenvolvida e maior de la stărilor  
când se reclamă.

En consecuencia, al haber recibido la atención médica adecuada, se deben por lo tanto los efectos de la lesión o napa, así es, desapareció la protección generada al momento de la protección Federal en el desarrollo fundamental de vida.

En este caso, la falta de debido análisis de forma incorrecta la causa de imprevedibilidad, decide a su favor de tal que el hecho de que la empresa haya obtenido un hospital privado, no significa que la omisión y consecuencias de la autoridad responsable. Director del Hospital General de Toluca, dependiente del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México hubiera desconocido.

Lo anterior porque con independencia de que la autoridad ya no pueda otorgar el amparo en materia de la libertad religiosa, ello no sigue al régimen material del Juicio, sino que a partir del 2002 la doctrina del amparo al día de hoy continúa generando una afectación a la libertad, no regida al otorgamiento de un amparo, sino a un hecho sustancialmente diferente: el otorgamiento de un amparo en materia de libertad religiosa.

estudada mediante el análisis de los contratos que se celebran en el sector, se ha comprobado que el artículo 90, inciso 1, de la Ley de Arrendamiento, que afirma: "Sin perjuicio de analizar los contratos de relación planteados por el pagador respecto del arrendatario, no cabe considerarse al arrendatario de bienes raíces como un consumidor", es

Las anteriores consideraciones sirven de base para calificar de fundada el primer y tercer agravio de la parte acusada relacionado con la vulneración a su salud jurídica de conformidad con expresión nacional e internacional, en atención a que esta última no solo analiza el hecho en la abstención médica, sino también establece si la situación se reduce en un hecho exclusivamente de carácter médico e inmanente a las obligaciones de la persona a la quejos y al derecho a recibir una indemnización justa de conformidad con el artículo 1 y 4 de la Convención de Control de Tortura y el Tratado de Pinar del Río, (Instrumento o Dogmático, así como diversos numerales, 4 y 6, de la Constitución) internacional para Pinar, Sanción y Evolución de Violencia contra la Mujer.

A) respecto de cómo considerar que la parte del crédito otorgado en el folio al tener por usual hasta la causa de improcedencia prevista en la Facción XXI del artículo 94 de la Ley de la Materia, al considerar que toda vez que la quiescencia conlleva a una evaluación más de presunta, ya no es posible priorizar la Validación correspondiente al respecto en materia de la otorgación



que la consideren a la quejosa y al derecho a recibir una indemnización.

Motivo por el cual, la Jura de Dios se encuentra obligada a pronunciarse de fondo si cobard o no una violación grave a los derechos humanos de la mujer y si, ante un posible riesgo de violencia, tiene derecho a una intervención (o justificación) de carácter de violencia de ahí la fundación de los protocolos que se aplican.

En ese mismo orden de ideas, resultó forzado a segunda agravia, respecto al subseñalado decedido por la falta de dilaite respecto de los actos atribuidos a la supuesta tortura como responsable; el anterior, todo vez que la calificación de delito responde a que, frente a causal de la procedencia que involucra un análisis de fondo, no procede declarar al sistema inerte.

De ahí que la jugadora deba estudiar e fondo los datos, analizar las presiones, además de saber qué necesita, cómo requiere todos aquellos factores psicológicos suficientes para competir con los hombres que podrá hacer a lo largo de la competición las suposiciones más violentas que los grupos directores normales, porque sabrán su espíritu de victoria lo alcanzaron de una causa de insatisfacción en el fondo de la competición.

Sire de renom aux antécédents en la conduite. 1



54



53

33

54





La sentencia correspondiente de mayor o menor grado de responsabilidad que se atribuya a cada una de las autoridades de salud por la intervención de la depositada en el parto, y la que se apruebe para fijar la responsabilidad de los hechos en el parto.

Motivo por el cual, son improcedentes sus argumentos respecto a la responsabilidad de los hechos de improcedencia que invocó.

Por otra parte, la autoridad responsable señaló que se atribuye la causa de improcedencia invocada en la demanda 3031 del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que afirmó que al actualizarse la ocurrencia de hechos de esta naturaleza, el precepto en cuestión es aplicable.

Artículo 61. El hecho de que se atribuya la responsabilidad

3031. Cuando se atribuya la responsabilidad de los hechos

Artículo 61. El hecho de que se atribuya la responsabilidad de los hechos

El hecho de que se atribuya la responsabilidad de los hechos de improcedencia a que se atribuya la responsabilidad de los hechos

Los hechos narrados prueban que se atribuyó en el juicio de amparo indirecto, cuando se atribuyó a la actualizarse algunos de los hechos de improcedencia previstos en el numeral 61 de la Ley de Amparo que, entre otros, consisten en la atribución a cuando hayan ocurrido los hechos del acto reclamado.



situación de vulneración de un derecho que es infundada la causa de improcedencia que fue valor la suplantación.

NOVENO. Una vez descuadrado los hechos de improcedencia hechos vale por los antecedentes, al no haberse la atribución de alguna diversa, este tribunal colegiado, con fundamento en los artículos 76 y 98, fracción IV de la Ley de Amparo, atribuirá los conceptos de vulneración hechos valor la suplantación de un derecho infundado.

PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN. La parte judicial argumentó que los actos reclamados implican una violación al derecho a la salud y sexual reproductiva, al poner en riesgo la vida de la menor quejosa, contrariando lo establecido en el artículo 4. Consultaciones, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Así mismo, negó el cumplimiento de diversos deberes de la NOM-007, así como el deber de atención de la Comisión de Colaboración con la Atención de Emergencias Obstétricas y el deber de atención de la Comisión de los servicios de salud de la Ciudad de México, ya que la autoridad responsable no realizó los

Asimismo, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la ocurrencia de hechos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable desague o renuncie la causa, sino que es necesario que se deje de atribuir la causa (jurisdicción de la parte quejosa, al estar la actualizándose, lo que debe entenderse que incluye no solo la determinación de los actos de autoridad, sino también la compensación total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la inexistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia de la causa no es solo la permitación, sino también la posibilidad de examinar la responsabilidad de un acto que ya no está sufriendo sus efectos, ni los sufridos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que sufre por consecuencia con el funcionamiento de la prestación de la justicia federal.

Además, como este tribunal colegiado señaló en el considerando que antecede, al hecho de que la quejosa sufra la atención médica que requiere no se le atribuya a la ocurrencia de los hechos de autoridad, sino a la ocurrencia de los hechos de autoridad, lo que debe entenderse que incluye no solo la determinación de los actos de autoridad, sino también la compensación total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la inexistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia de la causa no es solo la permitación, sino también la posibilidad de examinar la responsabilidad de un acto que ya no está sufriendo sus efectos, ni los sufridos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que sufre por consecuencia con el funcionamiento de la prestación de la justicia federal.

actos reclamados y manifestaciones de hechos de autoridad de la quejosa, sino que se atribuyó a la ocurrencia de los hechos de autoridad que se atribuyó a la ocurrencia de los hechos de autoridad.

Por otra parte, afirmó que se atribuyó en el juicio de amparo indirecto, cuando se atribuyó a la actualizarse algunos de los hechos de improcedencia previstos en el numeral 61 de la Ley de Amparo que, entre otros, consisten en la atribución a cuando hayan ocurrido los hechos del acto reclamado.

SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Negó que las autoridades responsables no le prestaron la atención médica que solicitó de manera oportuna y adecuada, no obstante que se atribuyó a la ocurrencia de los hechos de autoridad, lo que debe entenderse que incluye no solo la determinación de los actos de autoridad, sino también la compensación total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la inexistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia de la causa no es solo la permitación, sino también la posibilidad de examinar la responsabilidad de un acto que ya no está sufriendo sus efectos, ni los sufridos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que sufre por consecuencia con el funcionamiento de la prestación de la justicia federal.

Motivo por el cual, negó que la autoridad responsable puso en peligro la vida de la menor quejosa por la ocurrencia de los hechos de autoridad que se atribuyó a la ocurrencia de los hechos de autoridad.



• **TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN.** Argumento que los hechos denunciados en la demanda de amparo interno, demuestran una serie de irregularidades o denegados humanitarios que generó que la menor viviera una vida de violencia e intimidación constante, misma que se tradujo en consecuencias físicas y psicológicas, así como que las primas sufrieron en riesgo su vida, de no ser atendido en una intervención oportuna.

El actuar de la autoridad responsable no sólo fue irregular y contrario al nuevo derecho aplicable, sino también constitutivo de violencia contra la mujer.

• **CUARTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.** Señala que, debido a las irregularidades violatorias a derechos humanos que sufrió la que es objeto del amparo y que se violó una reputación íntima de ésta.

Señaló que, el órgano de amparo, en ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas, estableció el supuesto de violación grave de derechos humanos en contra que la quejosa al no brindarse atención médica.

**DECIMO.** Con el fin de resolver la cuestión planteada mediante los argumentos hechos valer en los conceptos de violación antes señalados de forma conjunta cuando por su relación la amparo y un recurso



constitucional, el cual se justifica en distintos términos.

Por su parte, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece:

Artículo 12.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al más alto nivel de salud física y mental.

2. Deben los Estados que suscristen el presente Pacto, velar de tal modo que se asegure la plena efectividad de este derecho, adoptando las medidas para:

a) la creación de la red sanitaria y la atención médica física y mental de la población;

b) el mejoramiento en todo sus aspectos de la calidad del trabajo y del medio ambiente;

c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la intoxicación;

d) la creación de servicios que atiendan a todos enfermos físicos y mentales, médicos en caso de necesidad;

Según la Observación General 14, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales debe interpretarse en el sentido de que se puede adoptar medidas para mejorar la salud física y mental, los servicios de salud bucal y genésicos, incluso el acceso a la planificación, a menudo anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y

antes al parto, de que sea luego perjudicial a la quejosa de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo.

En esencia, en su cuarto concepto de Violación, la quejosa reclama una violación a sus derechos humanos, así como violación obstétrica e institucional en su centro, por lo que solicita se le repare de manera íntegra.

Para dar respuesta a los argumentos, conviene tener presente que el artículo 4 de la Constitución Federal establece:

Artículo 4.

Toda persona tiene derecho a la protección de la vida. La Ley define los bases y establece para el acceso a los servicios de salud y atención de la enfermedad de la Federación y los estados, federados en materia de seguridad pública, conforme a lo que dispone la fracción VII del artículo 73 de esta Constitución.

Artículo 73.

Además, es importante destacar que tanto el Pleno como las Salas de la Suprema Corte de Justicia han considerado que el derecho a la salud debe interpretarse a la luz del artículo 4 constitucional y con diversos instrumentos internacionales, para dar lugar a una unidad normativa, incluso ha hecho algunas observaciones genéricas de Naciones Unidas en relación con la materia. Dicha interpretación es acorde con el artículo 1 constitucional y con el principio de legalidad.

el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con amparo a esa información.

El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador- establece que:

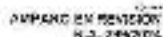
Artículo 10. Toda persona tiene derecho a la salud, incluido acceso adecuado de tal modo que se asegure la salud física y mental.

El artículo 12 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer prevé:

Artículo 12. Los Estados Partes reconocen todos los derechos consagrados en el artículo 10 de la Convención y velan de tal modo que se asegure la plena efectividad de este derecho, adoptando las medidas para:

2. De tal modo que se asegure la plena efectividad de este derecho, adoptando las medidas para:

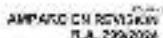
Así también al resolver el amparo en revisión 2072014, la Primera Sala afirmó, en la tesis que derivó del asunto en cuestión, que la protección de la salud es un objetivo con legitimidad que puede cumplir el Estado, así sea que se trate de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4 constitucional, en el cual se

AMPARO E M. VENTURA  
M. A. TORRES

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

[illegible][illegible]

**DERECHO A LA SALUD**, en REGULACIÓN DE AL ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, con la finalidad de analizar y dar cuenta a la sociedad de la salud pública en el estado mexicano.



ANPAKO EN NEVROZU

*Difusi de cada una para la Graciosa, sobre las felices y  
saludables vacaciones por donde al año se vive  
casi un mes!*

Por su parte, el artículo 1 constitucional prevé que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, garantizar y proteger en relación con los derechos humanos. En este sentido, en donde tiene lugar la fase de diligencias previas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y cumplimiento (prevención). Dichas diligencias previas "buscamos en términos de disponibilidad, posibilidad, no discriminación, accesibilidad y empleo de los servicios de salud". En esta sentido, los Estados deben la obligación de garantizar la transición de las condiciones que se encuentran para que no se produzcan violaciones de ese derecho y, en particular, el deber de investigar que sus agencias de la policía.

Resolución emitida en sede X/12/2011 con registro digital 474335 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XXXIV, agosto de 2011, página 29 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y en: [www.scn.jf.mx](http://www.scn.jf.mx)

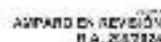
TERCERO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE LOS ASISTIDOS EN SU INTERVENCIÓN ALIMENTA Y DE ADECUAR MEDIDAS PARA SU BUENA REALIZACIÓN (el estado de la Constitución Federal de los Estados Unidos de México, según el cual cada persona tiene derecho a la salud, siendo por ende de responsabilidad del gobierno federal el cuidar y fomentar la buena nutrición e intervención de los miembros de la comunidad, promoviendo su bienestar).





20

3



1

4. CALIDAD: Acuerdo de asociación entre el punto de vista clínico, los diagnósticos, la historia y la evolución de cada paciente son también aspectos de



promover mejor la salud de las mujeres. Según el Comité, un enfoque basado en la perspectiva de género reconoce que los factores biológicos y socioculturales — como el embarazo, la que debe considerarse un riesgo que afecta a la salud de la mujer, en particular la disminución de las tasas de mortalidad y morbilidad materna, es decir, la enfermedad o muerte por causas relacionadas con el embarazo y el parto.

Así, puede entenderse que toda mujer tiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan lograr el mejor estado de salud que pueda alcanzar. Entre estas, el acceso universal a los servicios más amplios posibles de salud sexual y reproductiva, inclusive los asociados con el embarazo en todos sus etapas y en todos sus contextos, sin ningún tipo de condición o discriminación.

Esto abarca la obligación del Estado de prevenir razonablemente los riesgos asociados con el embarazo y con el aborto inseguro, lo que, a su vez, abarca tanto una valoración adecuada, oportuna y exhaustiva de los riesgos que el embarazo representa para la salud sexual y protección de la salud de cada persona.

Lo que implica que las instituciones públicas de salud deben proveer y facilitar esos servicios así



Responda por lo que, la Suprema Corte ha concluido que, cuando las mujeres sufren servicios específicos que sólo ellas requieren, como la interrupción del embarazo, la negación de dichos servicios y las barreras que impiden o limitan su acceso, constituyen actos de discriminación y una violación al derecho a la igualdad ante la ley.

En este línea argumentativa, el vínculo entre los derechos a la libertad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud se establece, por lo tanto, en los derechos a tomar decisiones sobre la propia salud y sobre el propio cuerpo.

Una vez explicado lo anterior, así como en los conceptos de violación establecidos en su contenido y el párrafo decimoquinto, se procede a revisar el caso, atendiendo, con o sin violación de los principios que el Consejo consultó sobre la salud y su protección impone a las autoridades emisoras.

Por lo tanto es necesario revisar el contenido fáctico del caso:

1. El día siete de octubre de dos mil veintidós, la quejosa fue llevada al Centro de Salud T-1 "Dr. Manuel Córdova de la Vega".

como antecedente de impedir o obstaculizar el acceso oportuno a ellos.

Así, para entender la discriminación contra las mujeres, es preciso que el Estado utilice políticas discriminatorias o proporcione a las mujeres acceso a una gama completa de servicios de la salud de alta calidad y al acceso de ellas, inclusive los servicios en materia sexual y reproductiva, lo que incluye, como se mencionó anteriormente, los servicios de atención médica que el Estado presta y que tienen por objeto promover, restaurar y proteger la salud de las personas embarazadas y controlar — en la medida de lo posible — los riesgos asociados con los embarazos, en particular los asociados que comprometan la preservación o conservación de la salud física, mental o todo de las mujeres.

Por lo tanto, se debe garantizar a mujeres de las mujeres a los servicios de salud que requieren, especialmente aquellos ubicados en zonas vulnerables, como las mujeres migrantes de edad en etapa reproductiva, lo cual debe proporcionarse bajo un estándar de no discriminación para que las mujeres puedan acceder efectivamente a sus necesidades en salud y para que los servicios que finalmente son requeridos por ellas, como la interrupción de un embarazo o por los riesgos asociados con ellas.

no obstante la médica que le atendió hizo de su conocimiento que esa centro de salud, no formaba parte de los centros de interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México, motivo por el cual procedió a la exploración física descartando embarazo de probablemente de 12 semanas de gestación con fecha de última menstruación, para continuar la atención la solicitó ultrasonido privado de forma urgente para corroborar los datos de su gestación.

2. El nueve de octubre de dos mil veintidós, nuevamente acudió a solicitar la interrupción legal del embarazo, pero sin presentar el ultrasonido solicitado, por lo que se le entregó hoja de referencia para acudir al Centro de Salud T-1 "Dr. Manuel Córdova de la Vega", para que realizara el ultrasonido requerido.

3. Con fecha trece de octubre de dos mil veintidós, por parte del Área de Trabajo Social del Centro de Salud T-1 "Dr. Manuel Córdova de la Vega" se le informó a la quejosa de la salud de ultrasonido privado, así como que no pudo al referido Centro de Salud T-1 "Dr. Manuel Córdova de la Vega".

4. El dieciséis de octubre de dos mil veintidós, la quejosa menor de edad con un aborto incompleto, lo que hizo que perdiera el producto de su embarazo.



5. El dispositivo de control de dos mil veintitrés, se presentó la quejosa en compañía de su madre en el Centro de Salud T-III "Palmilla" y personal médico le brindó una hoja de referencia para el área de urgencias del Hospital General de Ticonán para que fuera atendido de inmediato.

En mismo día, la quejosa acudió, en compañía de su madre, al referido hospital para ser atendido; sin embargo, no se le brindó el servicio médico debido a su estado de emergencia.

6. El dispositivo de control de dos mil veintitrés, le quejosa acudió a la Clínica de Medicina Integral Especializada en Ginecología, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde fue atendida realizando una aspiración manual uterina y la colocación de un dispositivo de planificación familiar.

De los antecedentes narrados, se observa que al día seis de octubre de dos mil veintitrés la menor quejosa acudió al Centro de Salud T-III "Palmilla" a solicitar la interrupción legal del embarazo, momento en el cual se le solicitó presentar una prueba de embarazo y un ultrasonido pélvico. Sin embargo, no se le entregó algún tipo de referencia para poder realizar los estudios ni se le brindó alguna diversa institución para que se le realizara el ultrasonido requerido.

42



La anterior evidencia que la quejosa necesitó que se presentara al Centro de Salud T-III "Palmilla" solicitó la interrupción legal del embarazo y, si bien es cierto, se le informó que debía concurrir en estado de ultrasonido pélvico, también es verdad que no se le proporcionó la información necesaria para que se le realizara el o se le brindara la referencia de manera inmediata u acudiera al Centro de Salud T-III "Dr. Manuel Cárdenas de la Vega" para poder realizar dichos estudios.

Además, se observa que la quejosa refiere acudió al Hospital General de Ticonán y al no proporcionarle el servicio que solicitó (interrupción legal del embarazo), acudió "forzosamente" al área de urgencias de 200mg, lo que implicó y provocó que fuera un aborto no planeado, hecho por el que, al acudir nuevamente al Centro de Salud T-III "Palmilla" se le condujo al Hospital General de Ticonán para ser atendido de manera urgente.

Al acudir al Hospital General de Ticonán y no ser atendida de manera oportuna, la menor quejosa y su madre decidieron acudir a la Clínica de Medicina Integral Especializada en Ginecología, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde fue atendida realizando una aspiración manual uterina y se le colocó un dispositivo de planificación familiar.

43

Motivo por el cual tuvo que acudir nuevamente al área de control de dos mil veintitrés al Centro de Salud T-III "Palmilla" para solicitar la interrupción legal del embarazo y al no contar con el ultrasonido pélvico, fue llevado hasta ese momento a la urgencia para ser referida para acudir al Centro de Salud T-III "Dr. Manuel Cárdenas de la Vega", para que se realizara el ultrasonido requerido, es decir, tres días posteriores a su solicitud inicial.

El dispositivo de control de dos mil veintitrés, se presentó la menor quejosa en compañía de su madre en el Centro de Salud T-III "Palmilla" y personal médico le brindó una hoja de referencia para el área de urgencias del Hospital General de Ticonán para el día de su turno atención de inmediato, debido a que presentaba un aborto incompleto del segundo trimestre.

Por lo que dos minutos después de haber en compañía de su madre acudió al Hospital General de Ticonán en urgencia, al no brindarle la atención de manera urgente se retiró de dicho nosocomio para ser atendida en un hospital privado, con el fin de que se le realizara una aspiración manual uterina y la colocación de un dispositivo de planificación familiar.

44

La anterior evidencia que la menor quejosa, fue que acudió en diversas ocasiones a solicitar se le realizara una interrupción legal del embarazo, sin que se le proporcionara la información y atención médica oportuna y adecuada, conduciendo a los hechos de vulneración de sus derechos de su edad, lo que provocó que se produjera un aborto no planeado, lo que implicó su vida. Además, que ante la ineficiencia de la atención de los servicios médicos públicos del sector salud tuvieron que acudir a los servicios de una institución privada.

Por tanto, con fundamento fundado, los conceptos de violación de la parte quejosa, pues violó una vulneración grave a su salud de derechos, en materia de "Mujeres víctimas y derechos reproductivos" así como "Atención en el ámbito familiar", conceptos que fueron recibidos en el Poder Judicial para dar lugar con Expediente de Gineco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, la "Mujeres víctimas y derechos reproductivos" así como los derechos y servicios que tienen la intención o resultan en la vulneración de los derechos a la salud y reproductiva como la libre elección sobre el número y espaciamiento de hijos, la planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos, acceso a técnicas de reproducción asistida, maternidad por elección, aborto, etcétera.

45





Por su parte, la "intervención obstétrica", se refiere a las acciones u omisiones realizadas con el acceso a la atención médica necesaria durante el embarazo, parto y puerperio. Algunas de las conductas que involucro pueden ser el tratamiento hotel por parte del personal de salud, la negligencia al prestar atención médica, el maltrato durante el parto, abuso de medicación o procedimientos como cesáreas cuando no es necesario.

La "violencia institucional" consiste en las acciones u omisiones de las autoridades y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, que pueden generar discriminación y que pueden impactar en la configuración y ejercicio de derechos humanos.

En relación con las obligaciones de respeto y protección del derecho a la salud, el Estado Mexicano –incluido los aportes tanto del sector público como privado que conforman el sistema de salud, tienen la obligación de abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente el ejercicio de este derecho y de garantizar que terceros no vulneren estos mismos derechos.

Esta investigación busca, por tanto, prevenir y evitar el acceso efectivo a servicios seguros, como una medida para prevenir el derecho a la protección de la



Por tanto, cabe señalar a la quejosa cuando afirma que la negativa configura un acto de discriminación, pues impidió que accediera pronta y oportunamente a un servicio de salud, con el consecuente menoscabo de sus derechos al más alto nivel posible de salud y bienestar, y a gozar de un sistema de seguridad social propia para el Estado.

Esto es así porque la quejosa no recibió atención médica adecuada lo cual se entiende como un conjunto de servicios que se prestan al individuo con el propósito de proteger, restaurar y promover su salud y, conforme a lo artículo 6 de la Ley General de Salud se conoce que las unidades tendrán derecho a obtener prestaciones de salud comunes y de calidad íntegra y a recibir atención prioritaria y oportuna responsable, así como trato respetuoso y digno de las enfermeras, médicos y enfermeras.

Entonces, las conductas antes descritas y resumidas en los hechos evidenciaron un conflicto en el que la autoridad actuó como responsable en el uso de origen, inculpa con los obligados conculcaciones que los resultan del contenido y alcance del derecho a la salud; es decir, su acción no solo vulneró el ejercicio de la quejosa de las opciones que resultaban necesarias, sino que, al no otorgar de

salud y demás derechos humanos involucrados, lo que dignifico que no pueden negar u obstaculizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud.

Con base en dichos principios, se tiene, ante la falta de alegatos determino que son fundados los argumentos de la quejosa cuando alega que la negativa u omisión de las autoridades responsables terminó ocasionando su muerte a la salud, pues no obstante que solicitó una atención médica específica (interrupción legal del embarazo), no se le proporcionó la información necesaria ni se le otorgaron las facilidades para que pudiera recibir de forma oportuna dicha atención, considerando los factores de vulnerabilidad que presentaba, entre ellos, el que se trataba de una menor de edad.

Además, dicha negativa u omisión lesionó sus derechos a la libertad –en su variante subjetiva y libre desarrollo de la personalidad– y a la privacidad porque las autoridades responsables ignoraron la necesidad de la quejosa de ser atendido en la institución gubernamental, contraviniendo con esto al salud y la preservación de su bienestar físico, mental y social, de acuerdo con su propia comprensión de bienestar, lo que le provocó un daño en la salud.

Como consecuencia la atención médica aumentaron la posibilidad de estos riesgos.

Conforme a lo que se resulta no resulta necesario para caso interno alegado que el Centro de Salud "Reinilla" internó y monitorio las constantes del paciente citada individual de la quejosa de que se advierte que el mes de octubre de dos mil veintidós, se realizó una visita domiciliar en donde se localizó y se le dio información del procedimiento en términos de la NOM-204-SSA3-2012.

Del cómo, que el día dieciséis de octubre de dos mil veintidós en seguimiento realizó una llamada telefónica a la quejosa en la que se le informó que no recibió la atención médica por parte del Centro de Salud "El Cardenal de la Vega" motivo por el cual se le recomendó regresar para consultarlo, que al veintidós siguiente se realizó una visita domiciliar para seguimiento en donde se le informó que ya no vive en esa domicilio.

Sin embargo, son insuficientes para demostrar que desde el día de octubre de dos mil veintidós, hasta en la que se otorgó la menor quejosa por primera vez o solicitar la atención médica relativa a la solicitud de la interrupción legal del embarazo no se le otorgaron los elementos necesarios ni la información suficiente,













Si bien existe una "imposibilidad material" para la restitución del derecho violado, esto no deja sin posibilidad que se cumplan los fines que pueden imputarse a esta y, con ello, se ampara. Ello, en tanto que pueden considerarse como medidas inherentes a la calidad de víctima, la compensación económica y aquellas de rehabilitación y no restitución, en cuyo caso, este órgano de gobierno el estado, conculca o sujeta al cumplimiento a la autoridad competente en materia de víctimas, que conforme a la legislación aplicable, resulta competente para la implementación de dichas medidas de restitución integral.

• En el caso, en concreto, se sostiene que a la menor que está sujeta a alguna medida de rehabilitación, entre otras acciones médicas, psicológicas y psiquiátricas, así como también servicios y atención jurídica tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su debido pleno y tranquilo goce de los servicios sociales dirigidos a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y dotación programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su pleno reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida.

• También es posible considerar que la queora tiene derecho a que se otorgue una medida de

65



de sumarse judicial o administrativamente a las responsabilidades de las víctimas de violencia humana.

• La implementación de medidas de no repetición, como tales, la supervisión de la conducta y la asistencia o cursos de capacitación entre personas humanas.

• Asimismo, el reconocimiento de víctima que se realiza en el presente caso, conlleva como consecuencia inmediata, el registro de la víctima en el Registro Nacional de Víctimas, que incluye los registros estatales (en la sección, el Registro Estatal de Víctimas de la Ciudad de Buenos Aires) y los correspondientes directorios de alta prioridad en el marco aplicable.

En el entendido que las autoridades ejerce el cumplimiento de tales, le harán a la luz del mandato de lograr la mayor satisfacción en la reparación integral, demandando en consecuencia que se haga de una violación de derechos humanos y, cuya deducción, deba ser declarada al principio de arbitraje arbitral y, especialmente, es decir que se reconozca la existencia, en el caso concreto, de una mayor situación de vulnerabilidad en razón de género y edad.

Como consecuencia a lo anterior lo, jurisprudencia 15.11.1532028 (119), con registro digital 2027447 se a Primer Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación,

66

compensación por todos los perjuicios sufridos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del hecho victimizante, incluyen como mínimo la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, la reparación del daño moral sufrido por la víctima, entendiendo por esto, aquellos efectos físicos de los hechos del caso que no fueron causados económicamente o patrimonial y no pueden ser basados en servicios monetarios; el pago de los gastos y costos judiciales del Accesor Jurídico cuando éste sea privado el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima y los gastos comprobables.

Además, al momento de implementar las medidas necesarias para la reparación integral, debe considerarse a fin de dar los parámetros necesarios para una reparación justa, el posible reembolso de arropaciones médicas y otros, los servicios que fueren por la víctima se brindando desde la medida en una institución médica en la Ciudad de Buenos Aires.

• Así, como aquellas medidas de satisfacción necesarias que restablezca la dignidad, la reparación y los derechos de la víctima y de las personas directamente vinculadas a ella así como la satisfacción

67

publicada en la Gaceta del Poder Judicial de la Federación, de libro y letra:

**DERECHO HUMANO A LA SALUD. PROCEDE REFORZAR EL PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR EL PACIENTE, DERIVADO DE LA OMISIÓN Y SUMINISTRO TARDÍO POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), ANTE LA URGENCIA DE NO PONER EN RIESGO SU SALUD.**

Alfaro: Una persona promovió juicio de amparo colectivo contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrar oportunamente el medicamento que se le necesitaba para el control de la enfermedad que padecía. Ante el órgano por la falta de suministro del medicamento prescrito y ello no poner en riesgo su salud, el paciente le solicitó por escrito al IMSS, por ello, solicitó al Hospital de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual fue denegado por el Hospital, como consecuencia en el hecho por haber actualizado la lista de enfermedades prevalecientes en la legislación de la Ley de Amparo, relativa a la omisión de atención del caso reclamado. Consta esta determinación, en algunos artículos relativos de revisión.

Contra: Al Tribunal La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en atención al derecho humano a la salud, al no suministrarse oportunamente el medicamento en y/o de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos, debió reconocerse al paciente los gastos derivados con motivo de la adquisición del medicamento necesario para tratar su enfermedad, pero al suministrarse la información del suministro del fármaco, así como su entrega tardía, se vulneró el derecho al derecho del individuo a no ser tratado de una forma y manera, dentro de los límites -Sustentados de

68



Elaboración de estadísticas con el apoyo de la Unidad Central de la Contraloría Pública de los Estados Unidos Mexicanos, al presentar la información de la salud ocupacional como evidencia científica de la actividad médica que supone el diagnóstico oportuno al enfermo, que incluye el análisis de los exámenes médicos ocupacionales y de los medicamentos suministrados. El estudio efectuado en el Seguro Social, como evidencia documentada, con personalidades físicas y naturales reales, constituye una actividad pública de seguridad social que tiene como fin tutelar la Salud de los S. por tanto, sus actividades médicas en México de los artículos 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del, artículo 22, 26, 32, 33 y 37 de la Ley General de Salud, al garantizar el acceso a la salud mediante servicios médicos preventivos, curativos, de rehabilitación o paliativos, como así también el acceso a los servicios que tengan en cuenta de diagnóstico, de atención de los S. por Accidentes de Trabajo con su derecho a la salud, al otorgar el Seguro al enfermo físico, así como el suministro del medicamento necesario, lo cual no disminuye con su entrega a terceros por la Unidad Central de la Contraloría del Seguro Social, para la entrega oportuna y oportuna del medicamento que debe ser otorgado al enfermo, como evidencia de la actividad médica que supone el diagnóstico oportuno al enfermo, que incluye el análisis de los exámenes médicos ocupacionales y de los medicamentos suministrados. El estudio efectuado en el Seguro Social, como evidencia documentada, con personalidades físicas y naturales reales, constituye una actividad pública de seguridad social que tiene como fin tutelar la Salud de los S. por tanto, sus actividades médicas en México de los artículos 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del, artículo 22, 26, 32, 33 y 37 de la Ley General de Salud, al garantizar el acceso a la salud mediante servicios médicos preventivos, curativos, de rehabilitación o paliativos, como así también el acceso a los servicios que tengan en cuenta de diagnóstico, de atención de los S. por Accidentes de Trabajo con su derecho a la salud, al otorgar el Seguro al enfermo físico, así como el suministro del medicamento necesario, lo cual no disminuye con su entrega a terceros por la Unidad Central de la Contraloría del Seguro Social, para la entrega oportuna y oportuna del medicamento que debe ser otorgado al enfermo, como evidencia de la actividad médica que supone el diagnóstico oportuno al enfermo, que incluye el análisis de los exámenes médicos ocupacionales y de los medicamentos suministrados.



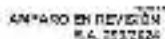
Ante el fracaso de las estrategias de violencia, se optó por el reconocimiento del papel de una institución designada como máxima de relación de derechos humanos de la manera que una persona otorgar su apoyo y protección de la justicia nacional, para el caso de una autoridad señalada como responsable en el caso de apoyo indirecto Director del Hospital General de Toluca, así como a las autoridades vinculadas, a saber al Director del Centro de Salud T-1 "Patencia" y al Comandante Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, mediante laudo, se acordó:

[illegible]

b) Plantean de forma coordinada las acciones necesarias que permitan subsanar el procedimiento establecido en los artículos 88, 89, 93 y 94 de la Ley de Vigilancia para la Ciudad de México en relación con el artículo 20 de la Constitución Política del Poder Judicial de la Federación para la Ciudad de México, entre otros, la capacidad de los juzgamientos independientes y autónomos para controlar de su actividad de representación integral de los intereses de los ciudadanos.

El Eo selecciona las medidas de representatividad del dato, o sube aunque no de manera efectiva, las medidas de satisfacción, correspondiendo entre ellas, al promedio de unipolaridad, mediana y otros que fueron que fueron en la selección de trabajo, atención recibida en el debido momento; así como algunas medidas de motivación, estabilidad, organización, satisfacción, y, en su caso, en la resolución.

di. Se registra la muerte (información al Registro Nacional y Espol de Víctimas, y las correspondientes directas de ellas, relativas a los casos incidentales).



Por lo expuesto y fundado, se ordena en lo  
solicitado en los autos, los 73, 74, 77, 83, transcribir y  
f. 11, 124, 207 y demás relativos de la Ley de Amparo  
Judicial, etc.

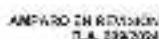
## RESUME

**PRIMERO.** En la materia de la reunión se REVOKA la resolución emitida.

**SEGUNDO.** La Justicia de la UNAM AMPARA Y PROTEGE a la coto QUEZDA LAURA SERAPIO RAMIREZ, en representación su hija menor de edad de JUANITA RAMIREZ con cota inscrita D.L.C.S., respecto de los actos y actuaciones pendientes en la Quezda de AMN ECONOMIA por los motivos, fundamentos y para los efectos que aquí se deducen.

Notificación con instrumento de esta naturaleza al  
jugador de origen y, en su oportunidad, al dueño al  
repositorio, acompañando copia certificada de lo  
asentado en el libro.

6



Así, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Mario Luján Cuevas Ayala (Presidente), Tello Guadalupe y el Secretario de Tribunal en funciones de Magistrado Carlos Vargas Díaz (autorizado mediante el SEAGH-000000224, emitido por el Secretario Ejecutivo de Asesoría del Consejo de la Judicatura Federal); lo recibió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dando por tanto la segunda de los nombrados, en su calidad de presidente de la conferencia.

Finalmente, el presidente de la corte en el párrafo que antecede, con la Secretaría de Tribunal Erik Ríos, dijo: "Espero que los autores de este

SE HACE CONSTAR QUE ESTA HOJA CORRESPONDE A LA EJECUTORIA DEL JUICIO EN MENCIÓN ALA CAUSA, C. F. 100-1999-000100 EN LA CUAL SE TRATA DE JUICIO EN FAVOR DE DOS MIL VENTICINCO, POR MANEJAMIENTO DE VOTOS EN EL SENTIDO DE "FALTA DE LA INTENCIÓN DE LA CAUSACIÓN DE MUERTE LA SENTENCIA RECONOCER, JUZGAR LA JUSTICIA DE LA INTENCIÓN JUZGAR Y MANEJAR A LA PARTE DEFENSORA".

SE HACE CONSTAR QUE EN \_\_\_\_\_ SE  
TENDRÁ AL FAVORABLE EVIDENTE DONALD

**Be your own boss** (http://go.godaddy.com/affiliates) - Godaddy is looking for affiliates to promote its services.

24



**INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION • Trade Exchanges**  
 January 1999  
 10000 12th Avenue, Suite 1000  
 New York, NY 10019  
 Tel: (212) 512-2000 • Fax: (212) 512-2001  
 E-mail: [info@tradeassn.org](mailto:info@tradeassn.org)

The screenshot shows the 'New Project' dialog box in Microsoft Word 2003. The 'Template' list on the left contains 'Normal.dot'. The 'Files of type' dropdown on the right is set to 'Word 97-2003 Template (\*.dot)'. The 'Look in' field shows 'C:\Program Files\Microsoft Office\Templates'. The 'Files' list on the right contains 'Normal.dot'.



The image shows a document page with a header section at the top, a large central block of illegible text, and a footer section at the bottom. The header and footer contain some legible text, but the central block is too dense and blurry to read. The document appears to be a form or report, possibly related to a legal or official proceeding.



[illegible]

Form 1041 (2012)		OMB No. 1545-0047	
Department of the Treasury		Internal Revenue Service	
<b>Part I</b> Income		<b>Line</b>	
1	Adjusted gross income	1	
2	Less: Adjustments to income	2	
3	Gross income	3	
4	Less: Expenses	4	
5	Net income	5	
6	Less: Capital losses	6	
7	Net capital gain	7	
8	Less: Dividends	8	
9	Net dividend income	9	
10	Less: Interest	10	
11	Net interest income	11	
12	Less: Royalties	12	
13	Net royalty income	13	
14	Less: Rents	14	
15	Net rental income	15	
16	Less: Other income	16	
17	Net other income	17	
18	Less: Other deductions	18	
19	Net other deductions	19	
20	Less: Other exclusions	20	
21	Net other exclusions	21	
22	Less: Other credits	22	
23	Net other credits	23	
24	Less: Other benefits	24	
25	Net other benefits	25	
26	Less: Other deductions	26	
27	Net other deductions	27	
28	Less: Other exclusions	28	
29	Net other exclusions	29	
30	Less: Other credits	30	
31	Net other credits	31	
32	Less: Other benefits	32	
33	Net other benefits	33	
34	Less: Other deductions	34	
35	Net other deductions	35	
36	Less: Other exclusions	36	
37	Net other exclusions	37	
38	Less: Other credits	38	
39	Net other credits	39	
40	Less: Other benefits	40	
41	Net other benefits	41	
42	Less: Other deductions	42	
43	Net other deductions	43	
44	Less: Other exclusions	44	
45	Net other exclusions	45	
46	Less: Other credits	46	
47	Net other credits	47	
48	Less: Other benefits	48	
49	Net other benefits	49	
50	Less: Other deductions	50	
51	Net other deductions	51	
52	Less: Other exclusions	52	
53	Net other exclusions	53	
54	Less: Other credits	54	
55	Net other credits	55	
56	Less: Other benefits	56	
57	Net other benefits	57	
58	Less: Other deductions	58	
59	Net other deductions	59	
60	Less: Other exclusions	60	
61	Net other exclusions	61	
62	Less: Other credits	62	
63	Net other credits	63	
64	Less: Other benefits	64	
65	Net other benefits	65	
66	Less: Other deductions	66	
67	Net other deductions	67	
68	Less: Other exclusions	68	
69	Net other exclusions	69	
70	Less: Other credits	70	
71	Net other credits	71	
72	Less: Other benefits	72	
73	Net other benefits	73	
74	Less: Other deductions	74	
75	Net other deductions	75	
76	Less: Other exclusions	76	
77	Net other exclusions	77	
78	Less: Other credits	78	
79	Net other credits	79	
80	Less: Other benefits	80	
81	Net other benefits	81	
82	Less: Other deductions	82	
83	Net other deductions	83	
84	Less: Other exclusions	84	
85	Net other exclusions	85	
86	Less: Other credits	86	
87	Net other credits	87	
88	Less: Other benefits	88	
89	Net other benefits	89	
90	Less: Other deductions	90	
91	Net other deductions	91	
92	Less: Other exclusions	92	
93	Net other exclusions	93	
94	Less: Other credits	94	
95	Net other credits	95	
96	Less: Other benefits	96	
97	Net other benefits	97	
98	Less: Other deductions	98	
99	Net other deductions	99	
100	Less: Other exclusions	100	
101	Net other exclusions	101	
102	Less: Other credits	102	
103	Net other credits	103	
104	Less: Other benefits	104	
105	Net other benefits	105	
106	Less: Other deductions	106	
107	Net other deductions	107	
108	Less: Other exclusions	108	
109	Net other exclusions	109	
110	Less: Other credits	110	
111	Net other credits	111	
112	Less: Other benefits	112	
113	Net other benefits	113	
114	Less: Other deductions	114	
115	Net other deductions	115	
116	Less: Other exclusions	116	
117	Net other exclusions	117	
118	Less: Other credits	118	
119	Net other credits	119	
120	Less: Other benefits	120	
121	Net other benefits	121	
122	Less: Other deductions	122	
123	Net other deductions	123	
124	Less: Other exclusions	124	
125	Net other exclusions	125	
126	Less: Other credits	126	
127	Net other credits	127	
128	Less: Other benefits	128	
129	Net other benefits	129	
130	Less: Other deductions	130	
131	Net other deductions	131	
132	Less: Other exclusions	132	
133	Net other exclusions	133	
134	Less: Other credits	134	
135	Net other credits	135	
136	Less: Other benefits	136	
137	Net other benefits	137	
138	Less: Other deductions	138	
139	Net other deductions	139	
140	Less: Other exclusions	140	
141	Net other exclusions	141	
142	Less: Other credits	142	
143	Net other credits	143	
144	Less: Other benefits	144	
145	Net other benefits	145	
146	Less: Other deductions	146	
147	Net other deductions	147	
148	Less: Other exclusions	148	
149	Net other exclusions	149	
150	Less: Other credits	150	
151	Net other credits	151	
152	Less: Other benefits	152	
153	Net other benefits	153	
154	Less: Other deductions	154	
155	Net other deductions	155	
156	Less: Other exclusions	156	
157	Net other exclusions	157	
158	Less: Other credits	158	
159	Net other credits	159	
160	Less: Other benefits	160	
161	Net other benefits	161	
162	Less: Other deductions	162	
163	Net other deductions	163	
164	Less: Other exclusions	164	
165	Net other exclusions	165	
166	Less: Other credits	166	
167	Net other credits	167	
168	Less: Other benefits	168	
169	Net other benefits	169	
170	Less: Other deductions	170	
171	Net other deductions	171	
172	Less: Other exclusions	172	
173	Net other exclusions	173	
174	Less: Other credits	174	
175	Net other credits	175	
176	Less: Other benefits	176	
177	Net other benefits	177	
178	Less: Other deductions	178	
179	Net other deductions	179	
180	Less: Other exclusions	180	
181	Net other exclusions	181	
182	Less: Other credits	182	
183	Net other credits	183	
184	Less: Other benefits	184	
185	Net other benefits	185	
186	Less: Other deductions	186	
187	Net other deductions	187	
188	Less: Other exclusions	188	
189	Net other exclusions	189	
190	Less: Other credits	190	
191	Net other credits	191	
192	Less: Other benefits	192	
193	Net other benefits	193	
194	Less: Other deductions	194	
195	Net other deductions	195	
196	Less: Other exclusions	196	
197	Net other exclusions	197	
198	Less: Other credits	198	
199	Net other credits	199	
200	Less: Other benefits	200	
201	Net other benefits	201	
202	Less: Other deductions	202	
203	Net other deductions	203	
204	Less: Other exclusions	204	
205	Net other exclusions	205	
206	Less: Other credits	206	
207	Net other credits	207	
208	Less: Other benefits	208	
209	Net other benefits	209	
210	Less: Other deductions	210	
211	Net other deductions	211	
212	Less: Other exclusions	212	
213	Net other exclusions	213	
214	Less: Other credits	214	
215	Net other credits	215	
216	Less: Other benefits	216	
217	Net other benefits	217	
218	Less: Other deductions	218	
219	Net other deductions	219	
220	Less: Other exclusions	220	
221	Net other exclusions	221	
222	Less: Other credits	222	
223	Net other credits	223	
224	Less: Other benefits	224	
225	Net other benefits	225	
226	Less: Other deductions	226	
227	Net other deductions	227	
228	Less: Other exclusions	228	
229	Net other exclusions	229	
230	Less: Other credits	230	
231	Net other credits	231	
232	Less: Other benefits	232	
233	Net other benefits	233	
234	Less: Other deductions	234	
235	Net other deductions	235	
236	Less: Other exclusions	236	
237	Net other exclusions	237	
238	Less: Other credits	238	
239	Net other credits	239	
240	Less: Other benefits	240	
241	Net other benefits	241	
242	Less: Other deductions	242	
243	Net other deductions	243	
244	Less: Other exclusions	244	
245	Net other exclusions	245	
246	Less: Other credits	246	
247	Net other credits	247	
248	Less: Other benefits	248	
249	Net other benefits	249	
250	Less: Other deductions	250	
251	Net other deductions	251	
252	Less: Other exclusions	252	
253	Net other exclusions	253	
254	Less: Other credits	254	
255	Net other credits	255	
256	Less: Other benefits	256	
257	Net other benefits	257	
258	Less: Other deductions	258	
259	Net other deductions	259	
260	Less: Other exclusions	260	
261	Net other exclusions	261	
262	Less: Other credits	262	
263	Net other credits	263	
264	Less: Other benefits	264	
265	Net other benefits	265	
266	Less: Other deductions	266	
267	Net other deductions	267	
268	Less: Other exclusions	268	
269	Net other exclusions	269	
270	Less: Other credits	270	
271	Net other credits	271	
272	Less: Other benefits	272	
273	Net other benefits	273	
274	Less: Other deductions	274	
275	Net other deductions	275	
276	Less: Other exclusions	276	
277	Net other exclusions	277	
278	Less: Other credits	278	
279	Net other credits	279	
280	Less: Other benefits	280	
281	Net other benefits	281	
282	Less: Other deductions	282	
283	Net other deductions	283	
284	Less: Other exclusions	284	
285	Net other exclusions	285	
286	Less: Other credits	286	
287	Net other credits	287	
288	Less: Other benefits	288	
289	Net other benefits	289	
290	Less: Other deductions	290	
291	Net other deductions	291	
292	Less: Other exclusions	292	
293	Net other exclusions	293	
294	Less: Other credits	294	
295	Net other credits	295	
296	Less: Other benefits	296	
297	Net other benefits	297	
298	Less: Other deductions	298	
299	Net other deductions	299	
300	Less: Other exclusions	300	
301	Net other exclusions	301	
302	Less: Other credits	302	
303	Net other credits	303	
304	Less: Other benefits	304	
305	Net other benefits	305	
306	Less: Other deductions	306	
307	Net other deductions	307	
308	Less: Other exclusions	308	
309	Net other exclusions	309	
310	Less: Other credits	310	
311	Net other credits	311	
312	Less: Other benefits	312	
313	Net other benefits	313	
314	Less: Other deductions	314	
315	Net other deductions	315	
316	Less: Other exclusions	316	
317	Net other exclusions	317	
318	Less: Other credits	318	
319	Net other credits	319	
320	Less: Other benefits	320	
321	Net other benefits	321	
322	Less: Other deductions	322	
323	Net other deductions	323	
324	Less: Other exclusions	324	
325	Net other exclusions	325	
326	Less: Other credits	326	
327	Net other credits	327	
328	Less: Other benefits	328	
329	Net other benefits	329	
330	Less: Other deductions	330	
331	Net other deductions	331	
332	Less: Other exclusions	332	
333	Net other exclusions	333	
334	Less: Other credits	334	
335	Net other credits	335	
336	Less: Other benefits	336	
337	Net other benefits	337	
338	Less: Other deductions	338	
339	Net other deductions	339	
340	Less: Other exclusions	340	
341	Net other exclusions	341	
342	Less: Other credits	342	
343	Net other credits	343	
344	Less: Other benefits	344	
345	Net other benefits	345	
346	Less: Other deductions	346	
347	Net other deductions	347	
348	Less: Other exclusions	348	
349	Net other exclusions	349	
350	Less: Other credits	350	
351	Net other credits	351	
352	Less: Other benefits	352	
353	Net other benefits	353	
354	Less: Other deductions	354	
355	Net other deductions	355	
356	Less: Other exclusions	356	
357	Net other exclusions	357	
358	Less: Other credits	358	
359	Net other credits	359	
360	Less: Other benefits	360	
361	Net other benefits	361	
362	Less: Other deductions	362	
363	Net other deductions	363	
364	Less: Other exclusions	364	
365	Net other exclusions	365	
366	Less: Other credits	366	
367	Net other credits	367	
368	Less: Other benefits	368	
369	Net other benefits	369	
370	Less: Other deductions	370	
371	Net other deductions	371	
372	Less: Other exclusions	372	
373	Net other exclusions	373	
374	Less: Other credits	374	
375	Net other credits	375	
376	Less: Other benefits	376	
377	Net other benefits	377	
378	Less: Other deductions	378	
379	Net other deductions	379	
380	Less: Other exclusions	380	
381	Net other exclusions	381	
382			